

JGE66/2003

DICTAMEN RESPECTO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA C. IRIS SANTACRUZ FABILA EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONSTITUYEN INFRACCIONES AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

Distrito Federal, a 10 de abril de dos mil tres.

VISTO para resolver el expediente número JGE/QISF/CG/027/2003, integrado con motivo de la queja presentada por la C. Iris Santacruz Fabila en contra del Partido de la Revolución Democrática, por hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y

R E S U L T A N D O

I. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil tres, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral el escrito signado por la C. Iris Santacruz Fabila en contra del Partido de la Revolución Democrática, en el que denuncia hechos que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que hace consistir primordialmente en:

“Iris Santacruz Fabila, por mi propio derecho, en mi carácter de militante del Partido de la Revolución Democrática y Precandidata a la Jefatura Delegacional en La Magdalena Contreras... con el debido respeto comparezco para exponer:

Que por medio del presente recurso ... vengo a interponer formalmente el presente recurso de queja, solicitando la salvaguarda de mis derechos político-electorales, en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal y del V Consejo Estatal del Partido de la

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

Revolución Democrática en el Distrito Federal, por la emisión de actos que violan mi derecho constitucional a ser votado, así como la regulación jurídica interna del partido, toda vez que en el proceso de selección de candidatos al puesto de elección popular de Jefatura Delegacional en La Magdalena Contreras no se observan debidamente las normas establecidas en forma expresa por el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, así como en el Reglamento General de Elecciones y Consultas de dicho partido político.

HECHOS

Fundo la presente queja en los siguientes hechos y consideraciones de derecho:

1.- El 19 de diciembre del año próximo pasado el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal dio a conocer, por medio de la prensa escrita, un Resolutivo Especial con relación a la integración de las candidaturas para el próximo proceso electoral de 6 de julio, mismo que a la letra dice:

**RESOLUTIVO ESPECIAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATA
DEL PRD EN EL D.F.**

CONSIDERANDO

1. Que la elección del 6 de julio de 2003 constituye una gran responsabilidad para el PRD capitalino, pues representa la oportunidad para refrendar nuestra mayoría en la Ciudad y coadyuvar al reposicionamiento nacional del PRD.

2. Que el 2º Pleno Ordinario del V Consejo Nacional celebró un “Acuerdo Político Electoral”, donde se estableció que “... se promoverán los mecanismos de selección de candidatos que resulten más idóneos para cada caso, de manera que el PRD postule siempre las candidaturas de mayor aceptación social y con más posibilidades de triunfo.”

El CEE del PRD D.F. en su sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2002

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

RESUELVE

ÚNICO: Celebrar ENCUESTAS en las 16 Delegaciones del D.F. durante el mes de enero, a fin de sustentar la concertación interna y la promoción de los consensos en la definición de los Candidatos a Jefes Delegacionales del PRD, y así abonar a la unidad y fortaleza partidarias.

DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN EL D.F.

2.- Con respecto a dicho proceso de selección, la Mesa Directiva del V Consejo Estatal emitió el día 19 de diciembre del año próximo pasado, por medio de la prensa escrita, la Convocatoria para elegir candidatos del Partido de la Revolución Democrática a Diputados Locales a la Asamblea Legislativa por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así como a Jefes Delegacionales del Distrito Federal, en cuya Base V, numeral 1, textualmente expresa:

V DE LAS ELECCIONES

1. DEL PLEBISCITO ELECTIVO

La elección del Jefe Delegacional y Diputados Locales de mayoría relativa será mediante votación universal, directa y secreta, abierta a la ciudadanía.

Podrán votar los ciudadanos que presenten su credencial de elector, así como los jóvenes mayores de 15 años y menos de 18 que cuenten con la credencial de afiliado del Partido de la Revolución Democrática.

Ninguna persona podrá votar en otra casilla que no sea la que le corresponde a la sección electoral de su domicilio.

Se dispondrá de un máximo de 750 boletas para cada casilla.

En el caso de que se elijan candidatos de unidad por encuesta, los precandidatos tendrán acceso a toda la información relativa a dicha encuesta. Las secciones electorales que participarán en la encuesta quedarán bajo reserva absoluta de la información antes y durante el levantamiento de la información.

Cuando los precandidatos debidamente registrados lleguen al acuerdo de dirimir la contienda a través de una encuesta, lo comunicarán por escrito al Servicio Electoral, y éste cancelará la elección. La encuesta

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

será patrocinada por el Comité Ejecutivo Estatal, quien asumirá la resolución correspondiente.

III. Con relación a dicha Convocatoria, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal emitió el 18 de enero del presente año, por medio de la prensa escrita, un comunicado a los Comités Ejecutivos Delegacionales del PRD en el Distrito Federal, mismo que a la letra dice:

**COMUNICADO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD-DF
A LOS COMITÉS EJECUTIVOS DELEGACIONALES DEL PRD EN EL
DF**

Por este conducto, la Comisión Plural de Candidaturas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD DF informa de su RESOLUTIVO UNÁNIME:

PRIMERO. ABRIR EL REGISTRO DE PRECANDIDATOS A JEFATURAS DELEGACIONALES QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA ENCUESTA VINCULATORIA DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE ENERO. El registro se realizará en los Comités Ejecutivos Delegacionales a partir del sábado 18 y hasta la 24 hrs. Del lunes 20 de enero.

SEGUNDO. Los aspirantes deberán presentar, junto con su solicitud:

- Currículum Vitae.
- Proyecto de Plataforma electoral Delegacional.
- Carta-compromiso de respeto a nuestros documentos básicos y al proceso.

TERCERO. Los CED'S celebrarán sesión extraordinaria cerrada, con la presencia de los Comisionados respectivos del CEE del DF, el martes 21 de enero, a fin de valorar las propuestas recibidas y otorgar el AVAL a los precandidatos que consideren conveniente. La Comisión sugiere que sea un número reducido de propuestas, a fin de garantizar que sean medidos únicamente los precandidatos de mayor potencialidad y de que la encuesta pueda mostrar con claridad el sentir ciudadano.

CUARTO. Los CED'S deberán tomar en cuenta CRITERIOS que garanticen lealtad y competitividad de los precandidatos a encuestar, tales como: trayectoria política y partidaria; inserción y aceptación social; perfil, capacidad y propuesta; identidad y compromiso, entre otros.

QUINTO. La Comisión Plural de Candidaturas del CEE recibirá las propuestas avaladas por los CED'S en las oficinas de Jalapa 88 a más tardar el miércoles 22 a las 11 hrs.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

SEXTO. La Comisión del CEE llama a la militancia a actuar con madurez y responsabilidad, a fin de registrar precandidatos con presencia y reconocimiento social. Asimismo, llamamos a los CED'S a evaluar a las diferentes propuestas con objetividad y a evitar exclusiones o favoritismos.

SÉPTIMO. A fin de garantizar el derecho de todos los militantes y a evitar exclusiones de precandidatos con capacidad y arraigo, la Comisión Plural de Candidaturas podrá recibir, evaluar y resolver de manera supletoria sobre los registros.

**DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD-DF**

IV. La emisión de los actos establecidos en los hechos I a III, constituyen la instrumentación de un procedimiento de selección de candidaturas a los puestos de elección popular de Jefaturas Delegacionales del Gobierno del Distrito Federal que violenta las disposiciones expresas del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática y del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, por parte de las autoridades señaladas en dichos puntos.

El artículo 13, párrafo 4, inciso c, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, ordenamiento de máxima jerarquía para la regulación de la vida interna del partido, establece que las candidaturas para Jefaturas Delegacionales del Distrito Federal serán definidas mediante voto directo, secreto y universal, como se observa en el texto expreso de dicho artículo.

ARTÍCULO 13º. La elección de los candidatos
1 y 2

3. Las elecciones de candidaturas uninominales a puestos de elección popular se llevarán a cabo de conformidad con la convocatoria. Cuando un consejo estatal se abstenga de emitir la convocatoria en el momento procesal requerido por el reglamento del Partido y la fecha de la elección constitucional, el Comité Ejecutivo Nacional asumirá esta función.

4. Se elegirán mediante voto directo, secreto y universal las candidaturas a:

a. La Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos; b. Las gubernaturas de los estados de la Unión y la jefatura de gobierno del Distrito Federal;

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

c. Las presidencias municipales y jefaturas delegaciones del Distrito Federal; d. Las diputaciones y senadurías al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa; e. Las diputaciones a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa.

5. a 14...

Al respecto, el artículo 11, párrafo 1, punto a, del mismo ordenamiento reconoce la figura del plebiscito electivo como forma de elección de candidatos a puestos de elección popular, sin especificar cuáles mismo que se desarrollaría por el simple acuerdo del consejo respectivo, en este caso, el estatal. El artículo de referencia expresa:

ARTÍCULO 11º. El plebiscito y el referéndum 1. El plebiscito es el método de consulta directa a los miembros del Partido o a la ciudadanía, cuyas modalidades son:

- a. Plebiscito electivo, para designar candidaturas a cargos de elección popular;
- b. Plebiscito consultivo, para optar entre dos o más proposiciones de línea política.

2. Por acuerdo del consejo respectivo del Partido, una o varias candidaturas podrán decidirse mediante el plebiscito electivo. La aplicación del plebiscito dejará sin efectos las elecciones internas del Partido que se hayan convocado pero no realizado. En la convocatoria se definirá si el plebiscito es exclusivamente para los miembros del Partido o abierto a la ciudadanía.

3. a 8...

Según se observa en el párrafo segundo del artículo antes transcrito, el plebiscito que en su caso se realizara anularía las elecciones internas que se hubieran convocado pero no realizado, de donde se puede inferir que anulará también la posibilidad de celebrar elecciones posteriores, pues éstas serían, con mayoría de razón, procedimientos innecesarios.

En relación con lo anterior, los artículos 22 y 23 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática establecen las características de un plebiscito electivo, como enseguida se muestra:

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

Artículo 22. Los Consejos Nacional y Estatales al emitir la convocatoria para la elección de candidatos a puestos de elección popular podrán establecer que determinadas candidaturas se elijan por plebiscito electivo. La elección de candidatos a puestos de elección popular tendrá el carácter de plebiscito electivo cuando:

- a) Se someta al voto de la ciudadanía en general y miembros del partido dos o más precandidaturas de miembros del Partido;
- b) Participen precandidatos que no sean miembros del Partido. En este caso, el método de consulta directa podrá ser exclusivamente a los miembros del Partido o a la ciudadanía en general.

Los miembros del partido y los ciudadanos votaran en la casilla que corresponda a su sección electoral.

Artículo 23. En el plebiscito electivo se aplicarán las reglas de la elección mediante votación universal, directa y secreta, con excepción de lo siguiente:

- a) Los candidatos externos deberán cumplir los requisitos previstos por el Estatuto;
- b) En su caso, de la participación de los miembros del Partido o ciudadanía general;
- c) Los precandidatos externos podrán nombrar representantes ante los órganos del Servicio Electoral desde el momento de su registro; y
- d) Podrán instalarse casillas adicionales dentro de los ámbitos territoriales de los Comités de Base y en aquellos lugares en que estos no existan, previo acuerdo del Servicio Electoral.
- e) La convocatoria determinara el número de boletas a imprimir por casilla.

La consulta directa que define a un plebiscito requiere de la manifestación expresa de la voluntad de los ciudadanos. Por ello, sólo puede estimarse que se han cumplido las disposiciones de los artículos antes citados si el plebiscito se realiza en forma directa, mediante la emisión de un voto estrictamente personal y determinado; secreto, mediante su no publicidad; y universal, al permitir la libre concurrencia voluntaria de cuantos ciudadanos cumplan con los requisitos dispuestos en la convocatoria.

Pues bien, los artículos 11 y 13 citados fueron los fundamentos esgrimidos por el V Consejo Estatal para convocar y celebrar los días 25 y 26 de enero pasados una Encuesta Vinculatoria para la

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

elección de candidatos a jefaturas delegacionales del Distrito Federal.

Ante ello, debe establecerse claramente la diferencia entre la naturaleza de un plebiscito y la de una encuesta; si bien, ambas figuras pueden considerarse como formas de participación ciudadana, el primero se basa en la participación espontánea, suponiendo una acción positiva y afirmativa de la voluntad, a movilización por plena voluntad para emitir el voto en un sentido estrictamente determinado, un ejercicio consciente de un derecho ciudadano, siendo además un ejercicio universal, delimitado exclusivamente por requisitos impuestos a los potenciales participantes (como la pertenencia a un partido); mientras que la segunda significa un sondeo aleatorio que no involucra una acción afirmativa de la voluntad, sino en forma indirecta, sólo cuando se solicita la participación llevando la votación hasta participantes escogidos por suerte, en donde las restricciones parte de la necesidad de establecer una muestra, es decir, una limitación al número de opiniones, y en donde el "voto" no se emite en un sentido estricto, puesto que la actitud del encuestado no necesariamente atiende a una manifestación espontánea de su voluntad, sino, en todo caso, a una coacción interna definida por la aceptación previa del encuestado a responder en uno u otro sentido la encuesta.

Las diferencias expuestas evidencian claramente que un encuesta vinculatoria no puede sustituir, ni siquiera equipararse, a un procedimiento plebiscitario. Por lo tanto, si se pretendiera que dicha encuesta fuera determinante para la elección de candidatos, se estaría en presencia de una flagrante violación al Estatuto en cuestión.

La convocatoria emitida el 19 de diciembre por el V Consejo Estatal dispone en su base V, numeral 1, que la elección de candidatos a jefaturas delegacionales será mediante votación universal, directa y secreta, abierta a la ciudadanía, es decir, observa las disposiciones revisadas del Estatuto. Sin embargo, el párrafo quinto de dicho numeral, sin ninguna fundamentación al respecto, establece la posibilidad de que se elijan candidatos de unidad por encuesta. Ahora bien, el párrafo siguiente establece literalmente que "cuando los precandidatos debidamente registrados lleguen al acuerdo de dirimir la contienda a través de

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

una encuesta, lo comunicarán por escrito al Servicio Electoral, y éste cancelará la elección”. Es decir, el numeral 1 bajo revisión dispone un mecanismo alternativo al plebiscito para elegir candidatos: una encuesta vinculatoria, puesto que cancelaría el plebiscito electivo, que debe, según la convocatoria, ser acordada por los propios candidatos.

Como se estableció antes, un plebiscito puede jurídicamente cancelar una elección, pero una encuesta no puede jurídicamente cancelar un plebiscito. Ahora bien, contra el argumento que considerara que la encuesta es en realidad un pacto entre candidatos y no un procedimiento formal, por lo que no tendría fuerza jurídica sino moral, debe observarse que la propia convocatoria estaría determinando que una encuesta sería vinculante, es decir, que su resultado sería obligatorio para las autoridades electorales, lo que le confiere el carácter jurídico. Por otra parte, no fueron los candidatos quienes acordaron la realización del procedimiento: el pasado 18 de enero fue publicado un “Comunicado del Comité Ejecutivo Estatal del PRD-DF a los Comités Ejecutivos Delegacionales del PRD en el DF”, en cuyo resolutive dispone la realización de la encuesta vinculatoria en cuestión y establece plazo perentorio para la inscripción al mismo, exigiendo para la inscripción una “Carta-compromiso de respeto” a los documentos básicos del partido y al propio procedimiento. Esa carta-compromiso no puede significar el acuerdo de los candidatos exigido por la convocatoria, puesto que es posterior a la resolución y era obligatoria para la inscripción.

V. Además de las consideraciones establecidas en el punto anterior, debe observarse que un procedimiento como el que se ataca afecta en forma sensible la relación de objetivos del partido, destruyendo el sustento ideológico de la institución política. En su declaración de principios, el Partido de la Revolución Democrática establece como base fundamental de su desarrollo el impulso de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la sociedad civil. En Capítulo denominado “El partido, instrumento de la sociedad”, el documento citado establece: “El PRD no busca el poder por el poder mismo, sino que lo concibe como medio para transformar democráticamente la sociedad y el Estado. Aspira a ser el cause de millones de ciudadanos y ciudadanas para organizarse políticamente en torno a sus postulados básicos. Rechaza el

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

corporativismo, el clientelismo y la manipulación de los intereses y sentimientos populares pues ello sólo conduce a profundizar el autoritarismo y la injusticia. La política que postula el PRD se base en la ética, los principios democráticos, la crítica y autocrítica constructivas; y la acción honesta y responsable.”

Pues bien, un mecanismo de elección como el que aquí se impugna convierte en este anónimo al ciudadano, en objeto de una muestra aleatorio que desarticula la intervención directa de su propia voluntad, inhibiendo así su participación política y atentando con ello contra la integración de la sociedad civil como soporte fundamental de la lucha democrática y, por lo tanto, del Estado Democrático de Derecho.

VI. Aunque estoy plenamente consciente de que las bases de una convocatoria para la elección de candidatos, emitida por el órgano competente, no puede establecer disposiciones que contravengan la normatividad interna de un partido, y no puede hacerlo tampoco una resolución de autoridad interna como no sea aquella que modifique dicha normatividad por los causes legales, me parece oportuno aclarar mi disposición expresa a participar en un procedimiento electivo que violenta las disposiciones internas, de conformidad con los argumentos esgrimidos en los hechos anteriormente expresados, como medio para demostrar mi legitimación como sujeto activo del derecho de impugnar dicho procedimiento.

Como ya se dijo, la inscripción al proceso era imprescindible pues representa la única forma de legitimar al precandidato como sujeto activo para presentar una impugnación: el artículo 57 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática establece que los medios de impugnación destinados a garantizar que los actos y resoluciones del Servicio Electoral, incluso aquellos actos preparatorios del proceso electivo que realicen instancias diversas a la antes citada, se apeguen al Estatuto y al Reglamento en cita, podrán ser interpuestos sólo por los candidatos y los precandidatos a través de sus representantes, según se observa en el texto legal:

Artículo 57. Para garantizar que los actos y resoluciones del Servicio Electoral se apeguen al Estatuto y a este Reglamento los candidatos y

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

precandidatos a través de sus representantes cuentan con los siguientes medios de defensa:

- a) Las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones de los Comités Municipales y Estatales del Servicio Electoral, mismo del que resolverá el superior jerárquico;
- b) Las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones del Comité Nacional del Servicio Electoral, del cual conocerá la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.
- c) Las impugnaciones en contra de los cómputos totales de las elecciones y procesos de consulta, de la que resolverá la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.

Los actos de preparación de la elección, aun los tomados por los órganos de dirección o representación del partido, se ventilaran en forma sumaria ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, con excepción de los señalados en el inciso a) del presente artículo.

Un ciudadano no adquiere la calidad de precandidato sino hasta que da cumplimiento a una serie de requisitos formales y es investido de tal carácter por una institución. Es decir, no basta nombrarse a sí mismo como precandidato, para estar protegido por la regulación jurídica respectiva. En este caso, se requeriría del registro al procedimiento electivo para que una institución interna competente, el V Consejo Estatal, definiera a los precandidatos otorgando con ese acto la cobertura jurídica del Estatuto y el Reglamento aludidos. Quien no quedara inscrito en el proceso, sencillamente, no tendría el carácter jurídico de precandidato a puesto de elección popular por el PRD y no nacería ningún derecho a su favor. Ello según fundamenta el artículo 36 del mismo Reglamento, en el que se dispone la obligación del órgano encargado de la elección para emitir una constancia que acredite la inscripción de los miembros interesados como precandidatos a puestos de elección popular, si bien en este caso únicamente se expidió el acuse de recibo de que habla el artículo 35 del mismo ordenamiento. Los artículos aludidos expresamente disponen:

Artículo 35. Dentro del plazo señalado por la convocatoria respectiva para el registro de candidatos el Servicio Electoral encargado de realizar

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

el registro extenderá acuse de recibo con número de folio y fecha de la solicitud y los documentos que la acompañen.

La solicitud de registro de candidatos o precandidatos deberán especificar los datos siguientes:

- a) Apellidos y nombre completo;
- b) Lugar y fecha de nacimiento;
- c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
- d) Cargo para el que se postula;
- e) Señalar la calidad personal respecto de las acciones afirmativas.

La solicitud se acompañará de la declaración de aceptación de la candidatura, de una copia de la credencial de elector con fotografía, los recibos de sus cuotas ordinarias. Para precandidatos en relación con puestos de elección popular además la documentación que se requiera para acreditar los requisitos exigidos por la ley electoral respectiva.

El órgano electoral comprobará la vigencia de derechos de los miembros con base en los informes que les envíe las Comisiones de Garantías y Vigilancia.

Artículo 36. Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo para el registro de candidatos los órganos del Servicio Electoral facultados para ello celebrarán sesión con el único objeto de resolver las solicitudes de registro de candidaturas o precandidaturas, extendiendo constancia de ello a los interesados.

Antes del vencimiento de este plazo el Servicio Electoral podrá requerir al solicitante aclaraciones o subsanar errores, de no desahogarse el requerimiento en un plazo de 24 horas, se resolverá con la documentación con que se cuente.

El orden en que aparezcan en las boletas electorales los nombres de los candidatos, precandidatos o planillas se les asignará un número consecutivo de acuerdo al orden de presentación de solicitud de registro.

En este caso, el registro para el proceso electivo únicamente se infiere a partir de mi inclusión en los nombres de los precandidatos que la compañía consultora manejó en la encuesta que aquí se comenta, pues, por un lado, no puede establecerse jurídicamente a partir del documento expedido como acuse de recepción de los documentos que acreditan mi cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria y, por otro lado, nunca

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

me fue expedida la constancia de que habla el artículo 36 transcrito.

Pues bien, una vez obtenido el registro, se adquiere la necesidad de permanecer dentro del proceso hasta su término, y para ello se somete a los participantes a la obligación de “respetar” el proceso y no emitir durante la campaña “acusaciones públicas contra el Partido”, bajo amenaza de sanción consistente en la cancelación del registro para el aspirante que procediera en contra de dichas reglas.

La obligación de respetar el proceso y al partido así como la sanción descrita se disponen en la Convocatoria citada en el punto II de hechos de este recurso, la cual es vigente y obligatoria en tanto no se anula por algún órgano competente, dentro de su base II, numeral 1, inciso c, mediante la solicitud de una carta compromiso de respeto a los documentos básicos del partido, misma que expresamente establece:

II. LOS REQUISITOS

1. Para ser postulado como candidato a Jefe Delegacional y candidato a Diputado Local se deberá de cumplir con:

a. y b...

c. Firmar un compromiso con la transparencia que comprometa a respetar los principios, el programa y el Estatuto del partido, no atacar al partido ni a los otros precandidatos y asumir la responsabilidad de las irregularidades electorales o las denuncias públicas o los actos de violencia (ocupación de instalaciones, mítines en contra de autoridades y de los órganos del PRD, etc.) que fuesen realizadas por simpatizantes durante todo el proceso. Los precandidatos que no cumplan con estos compromisos serán suspendidos en sus derechos para postularse como candidatos del partido.

2. ...

Dicha disposición se complementa con el Comunicado citado en el punto III de hechos de la presente queja, en su resolutive **SEGUNDO**, en el cual expresamente establece:

SEGUNDO. Los aspirantes deberán presentar, junto con su solicitud:

- Curriculum Vitae.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

- Proyecto de Plataforma electoral Delegacional.
- Carta-compromiso de respeto a nuestros documentos básicos y al proceso.

Por su parte, la obligación de no atacar al partido está contenida en el artículo 39 del Reglamento multicitado, como enseguida se muestra:

Artículo 39. La campaña se iniciará a partir del día siguiente de la sesión en que se aprueben los registros de candidatos o precandidatos, debiendo concluir dos días antes de la jornada electoral. En consecuencia, el día de la jornada y durante los dos días anteriores no se permitirá ningún acto de campaña, propaganda o proselitismo.

Queda estrictamente prohibido que los aspirantes realicen durante su campaña acusaciones públicas contra el Partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del Partido.

Los integrantes del Servicio Electoral y de los Comités Ejecutivos tienen la obligación de abstenerse de hacer campaña, o de promover por cualquier medio o cualquier declaración pública, a favor de cualquier candidato o planillas registradas. La violación de esta disposición será sancionada con destitución del cargo.

De lo anterior deriva la estricta necesidad de permanecer en el proceso electivo que aquí se aborda y la imposibilidad para su impugnación en forma previa al término del mismo, sea por vía legal o política, pues ambas pueden traer como resultado inmediato la cancelación del registro como precandidato y, por tanto, la pérdida de la legitimidad activa para impugnar.

VII. Como se advirtió en el párrafo séptimo del punto IV de la parte relativa a Hechos en el presente escrito, la encuesta destinada a la elección de candidatos del Partido de la Revolución Democrática para los puestos de elección popular de Jefes Delegacionales a las 16 Delegaciones del Distrito Federal, tuvo verificativo los días 25 y 26 de enero del presente año. Al respecto, el día 29 de enero de 2003 remití al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, con copia a la empresa Consulta Mitofsky, un oficio por el cual solicité me fuera proporcionada, a la brevedad posible, la lista de precandidatos registrados a participar en la encuesta de referencia, con respecto

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

a la Jefatura Delegacional de La Magdalena Contreras, así como toda la información generada en la misma.

Sin embargo, y a pesar de que la petición anterior tiene sustento en la propia convocatoria del 19 de diciembre, en su base V, numeral 1, párrafo quinto, hasta la fecha no he recibido respuesta alguna, violentando con ello el derecho que como miembro del partido me otorga el artículo 4º párrafo 1 inciso d, del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.

VIII. El pasado 4 de febrero el V Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal dio a conocer, por medio de la prensa escrita, un Acuerdo con relación a la Convocatoria para elegir candidatos de dicho partido a diputados locales a la Asamblea Legislativa por el principio de mayoría relativa, así como a jefes delegacionales en el Distrito Federal, que a la letra dice:

**ACUERDO
DEL V CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN EL D. F., CON RELACION
A LA CONVOCATORIA PARA ELEGIR CANDIDATOS DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA A DIPUTADOS LOCALES A
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA
RELATIVA; ASI COMO A JEFES DELEGACIONALES EN EL
DISTRITO FEDERAL.**

En la Ciudad de México, D. F., a los dos días de febrero de 2003, el V Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, reunido en las instalaciones del Salón "El Barón" ubicado en las calles de Frontera y Colima, Col. Roma, D. F., instalado en sesión de 5º. Pleno Extraordinario conforme al art. 32 de su Reglamento, con el quórum y los términos legales requeridos, y teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el próximo 6 de julio de 2003 se realizarán elecciones concurrentes en el D. F., para elegir Diputados Federales y Locales, así como Jefes Delegacionales, constituyendo una gran oportunidad para refrendar la mayoría del PRD en la Ciudad y coadyuvar al reposicionamiento nacional de nuestro partido;
2. Que el 6 de diciembre de 2002 el V Consejo Nacional del PRD publicó la Convocatoria para elegir a los Candidatos y Candidatas del PRD a Diputados y Diputadas al Congreso de la Unión;

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

3. Que el 14 de diciembre de 2002 el V Consejo Estatal del PRD en el D. F. publicó la Convocatoria para elegir Candidatos del PRD a Diputados Locales a la Asamblea Legislativa por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; así como a Jefes Delegacionales en el D. F.

4. Que el 13 de diciembre de 2002 el Comité Ejecutivo Estatal del PRD en el D. F. acordó en Sesión Extraordinaria "Único: Celebrar Encuestas en las 16 Delegaciones del D. F. durante el mes de enero, a fin de sustentar la concertación interna y la promoción de los consensos en la definición de los Candidatos a Jefes Delegacionales del PRD, y así abonar a la unidad y fortalezas partidarias".

5. Que el 1º. de febrero de 2003 el 7º. Pleno del V Consejo Nacional , de conformidad con sus facultades establecidas en el art. 13, numeral 5, inciso a), y en cumplimiento de la Base V de la Convocatoria referida en el considerando 2, "RESUELVE: PRIMERO: Se reserva para definición posterior de sus candidaturas los Distritos Electorales Federales", entre otros, los 30 correspondientes al D. F.

6. Que en la misma sesión referida en el punto anterior se aprobó el siguiente RESOLUTIVO PARTICULAR : "Por acuerdo del V Consejo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional junto con el Comité Ejecutivo Estatal resolverá sobre la reserva de candidaturas federales y, en su caso, de candidaturas locales relativas al Distrito Federal".

Este V Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el D. F., con base en las facultades que le confiere el Estatuto del PRD en su artículo 8, numeral 4 incisos a) y e), artículo 13, numeral 5 incisos a) y c), y artículo 15.

R E S U E L V E :

UNICO. RESERVAR LA TOTALIDAD DE LAS 40 CANDIDATURAS LOCALES A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, ASI COMO LAS 16 CANDIDATURAS A JEFES DELEGACIONALES EN EL DISTRITO FEDERAL.

Notifíquese al Comité Estatal del Servicio Electoral en el D. F. a fin de que proceda a realizar lo conducente.

Publíquese en un medio escrito de circulación nacional para que sea de conocimiento de toda la militancia.

"DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS"

Mesa Directiva

Carlos Arturo Salazar Alvarado
Presidente

Daniel Ordoñez Hernández
Vicepresidente

Cristina Erendira García Rayón
Secretaria

Pamela Ivette Ortiz Barrios
Secretaria

Luis Felipe Moo López
Secretario

IX. Respecto a este último acuerdo, cabe señalar que los fundamentos ofrecidos para su emisión están constituidos por los artículo 8, numeral 4, incisos a y e, así como 13, numeral 5, incisos a y c, ambos del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática. Dichos artículos disponen:

ARTÍCULO 8º. El Consejo, el Comité Ejecutivo y la Comisión Política Consultiva del Partido en el estado

1 a 3...

4. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el estado entre Congreso y Congreso; se reúne al menos cada tres meses; sus funciones son:

a. Dirigir la labor política y la organización del Partido en el estado y expedir la plataforma electoral; elaborar su agenda política anual; cumplir las resoluciones de los órganos de dirección superiores; normar la política del Partido con otros partidos políticos, con las organizaciones políticas, sociales y económicas estatales; vigilar que los representantes populares y funcionarios del Partido apliquen la línea política y el programa del Partido;

b a d...

e. Convocar a la elección de las candidaturas a cargos de elección popular en el nivel local y municipal;

...

ARTÍCULO 13º. La elección de los candidatos

1 a 4...

5. Las candidaturas externas serán nombradas de la siguiente manera:

a. El Consejo Nacional y los consejos estatales podrán nombrar candidatos externos hasta en un veinte por ciento del total de las candidaturas que deba postular el Partido a un mismo órgano del Estado, excepto si por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes presentes de los Consejos se decide ampliar el porcentaje.

b...

c. Corresponderá a los consejos estatales elegir a los candidatos externos a gobernador, diputados locales e integrantes de las planillas municipales.

...

Como se aprecia, no existe en los artículos transcritos fundamento alguno que permita derivar la facultad del Consejo Estatal, ni siquiera del Nacional para reservarla elección de candidatos a puestos de elección popular que se discuten.

Por un lado, en los incisos especificados del artículo 8 únicamente se disponen facultades genéricas relativas a la dirección de las actividades políticas y electorales del partido en el ámbito local, entre ellas, la de convocar a elecciones. Pero precisamente por esa generalidad no puede fundarse en ellas la facultad de contravenir un procedimiento determinado mediante mandato expreso del propio Estatuto, como es la elección de candidatos por el voto universal de miembros o ciudadanos.

Por otro lado, el numeral 5, y todos sus incisos, del artículo 13 se refieren a las reglas para designación de candidaturas externas, entendidas éstas como la candidatura que obtiene un ciudadano no militante del partido para contender en un puesto de elección popular bajo la nomenclatura de éste.

Por lo expuesto, los artículos de referencia son inaplicables para fundamentar la resolución del Consejo Estatal referida. De hecho, no es posible derivar dicha facultad de ninguno de los ordenamientos que regulan la organización del partido y sus

procedimientos electorales internos. Por ello, el resolutivo que aquí se analiza violenta los artículos 11 y 13 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, así como 22 y 23 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, bajo las mismas premisas establecidas en el punto IV de hechos del presente documento.

X. Como consecuencia del acuerdo citado en el punto VIII de la parte de Hechos de este documento, el pasado 23 de febrero se actualizó el término dispuesto por la convocatoria citada en el punto II de la misma parte para que tuviera verificativo el plebiscito electivo para elegir candidatos del Partido de la Revolución Democrática a los puestos de elección aludidos, sin que al efecto se haya realizado.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

Los preceptos jurídicos violados generan la **privación de los derechos políticos cuya restitución reclamo por medio de la presente queja**, conforme a lo siguiente:

a) Violación al artículo 13º del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, mismo en el que se establecen estrictamente los mecanismos para la elección de candidatos a puestos de elección popular, y entre ellos no se cuenta el procedimiento impugnado.

b) Violación al artículo 2º del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, mismo en el que se dispone la organización de los procesos electorales y de consulta como facultad del Servicio Electoral del partido y no de una empresa particular, en correlación con el 32 del mismo ordenamiento, mismo en el que se dispone que los procesos de elecciones internas para la postulación de candidatos a puestos de elección popular en el ámbito estatal serán coordinadas por los Comités Estatales del Servicio Electoral, siendo la misma violación anotada.

c) Violación al artículo 4º del Estatuto citado, mismo en el que se dispone como derecho de los miembros del partido el de votar y ser votados en los términos de la reglamentación aplicable, en correlación con el artículo 4º del Reglamento citado, mismo en el

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

que dispone el derecho de los miembros del partido para votar en los procesos de elecciones y consultas, por lo que en el proceso de elección de candidatos a Jefaturas Delegacionales debieron tener la posibilidad de votar todos los miembros del partido y no únicamente los escogidos aleatoriamente por la muestra.

d) Violación al artículo 36 del Reglamento en cita, mismo en el que se dispone la obligación del órgano encargado de la elección para emitir una constancia que acredite la inscripción de los miembros interesados como precandidatos a puestos de elección popular, siendo que en este caso únicamente se expidió el acuse de recibo de que habla el artículo 35 del mismo ordenamiento.

e) Violación al artículo 4º y correlativos del Estatuto citado, mismos en los que se establece la obligación de todos los miembros del partido para respetar la Declaración de Principios del mismo de conformidad con lo expuesto en la última parte del punto V de hechos en el presente documento.

f) Violación al artículo 4º numeral 1 inciso a, mismo en el que se establece el derecho de los miembros del partido para tener acceso a la información veraz y oportuna respecto del mismo, toda vez que la solicitud de información referida en el punto VII de la parte de HECHOS de la presente queja no me ha sido contestada.

g) Violación al artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo en el que se dispone como función de los partidos políticos hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, siendo que en la selección de candidatos a que alude la queja fueron violentados los programas y principios del partido, así como la normatividad interna que los sustenta.

h) Violación al artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo en el que se dispone como prerrogativa del ciudadano la de votar y ser votado para cargos de elección popular, siendo que con el proceso electivo que se ataca se me restringe dicha garantía al realizarse mediante una violación a los procedimientos previamente establecidos en la normatividad interna del partido, misma que

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

resulta exactamente aplicable y jurídicamente vinculatoria, y toda vez que he atendido todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Constitución, la legislación secundaria aplicable y la regulación interna del partido.

i) Violación al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su numeral 1, inciso a), mismo en el que se dispone la obligación de los partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los causes legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; así como en su inciso b), mismo en el que se dispone la obligación de dichos institutos políticos de abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno, siendo que al infringir las disposiciones internas para la elección democrática de candidatos a los puestos de elección popular en cuestión, se separan las actividades partidistas de los causes legales y de los principios del Estado democrático, se restringen los derechos de los ciudadanos y se recurre a actos que perturban el goce de las garantías políticas constitucionales.

...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentada en tiempo y forma la presente queja en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal y del V Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en dicha entidad, por actos que pueden constituir faltas administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEGUNDO. Revocar las tres resoluciones impugnadas, declarando la nulidad de todos y cada uno de los actos y efectos emanados de ellas.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

TERCERO. Acordar la reposición del proceso de elección interna para elegir candidatos a puestos de elección popular de conformidad con los artículos 13, numeral 4, inciso c), del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, así como 2, 4 párrafo segundo, 22 inciso a), 23 y 32 inciso b), del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática.

CUARTO. Restituirme en el goce de todos y cada uno de los derechos de que se me ha privado por los actos que motivan la interposición del presente recurso.”

Anexando la siguiente documentación:

- a) Copia simple de su credencial de elector.
- b) Copia simple de la constancia de afiliación del Partido de la Revolución Democrática.
- c) Copia simple del oficio de fecha quince de febrero de dos mil, signado por el Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, por medio del cual se hace constar que la C. Iris Edith Santacruz Fabila está al corriente del pago de sus cuotas mensuales.
- d) Copia simple del escrito de fecha veinte de enero de dos mil tres, signado por la C. Iris Edith Santacruz Fabila dirigido a la Comisión Plural de Candidaturas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD-DF (sic) y al Comité Ejecutivo Delegacional del PRD (sic) de Magdalena Contreras, por medio del cual solicita su registro como precandidata a la Jefatura Delegacional de Magdalena Contreras para el período 2003-2006, para así participar en la encuesta vinculatoria.
- e) Copia simple del currículum vitae de la C. Iris Edith Santacruz Fabila.
- f) Copia simple del proyecto de plataforma electoral Delegacional.
- g) Copia simple de la carta compromiso de respeto a los documentos básicos y al proceso del Partido de la Revolución Democrática, de fecha veinte de enero de dos mil tres, signado por la C. Iris Edith Santacruz Fabila dirigido al Comité Ejecutivo Estatal del PRD-DF (sic) y a la Comisión Plural de Candidaturas.
- h) Copia simple del recibo de la documentación entregada por la C. Iris Edith Santacruz Fabila al Presidente del Comité Ejecutivo Delegacional del Partido de la Revolución Democrática en Magdalena Contreras.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

- i) Copia simple del resolutivo especial del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal.
- j) Copia simple de la Convocatoria para elegir candidatos del Partido de la Revolución Democrática a diputados locales a la Asamblea Legislativa por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; así como a jefes delegacionales en el Distrito Federal.
- k) Copia simple del Comunicado del Comité Ejecutivo Estatal del PRD-DF (sic), a los Comités Ejecutivos Delegacionales del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal.
- l) Copia simple del Acuerdo del V Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, con relación a la Convocatoria para elegir candidatos del Partido de la Revolución Democrática a diputados locales a la Asamblea Legislativa por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; así como a jefes delegacionales en el Distrito Federal.
- m) Copia simple de los resultados de dos encuestas realizadas por la empresa Consulta Mitofsky.
- n) Copia simple del oficio de fecha veintinueve de enero de dos mil tres, signado por la C. Iris Santacruz Fabila dirigido al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal.
- o) Copia simple del oficio de fecha dos de febrero de dos mil tres signado por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, dirigido al Presidente del Servicio Electoral en esa entidad federativa, mediante el cual le informa que con base en el resolutivo aprobado en el quinto pleno extraordinario del V Consejo Estatal, realizado ese mismo día, le solicita tomar las medidas necesarias para que la apertura de registro de precandidatos prevista para el día tres de febrero, se cancele.
- p) Copia simple del oficio de fecha dos de febrero del año en curso, signado por el Comité Estatal del Servicio Electoral del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, dirigido a los Comités Auxiliares Delegacionales en la mencionada entidad federativa, a través del cual les comunica que se cancela el registro de precandidatos a diputados locales por mayoría relativa y jefes delegacionales en el Distrito Federal.

II. Por escrito de fecha cuatro de marzo de dos mil tres, la C. Iris Santacruz Fabila ofreció pruebas supervenientes con relación a los hechos denunciados, consistentes en las copias simples del oficio de dos de febrero del presente año signado por el

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal dirigido al Presidente del Servicio Electoral del partido político en la mencionada entidad federativa, por medio del cual le comunica que se tomen las medidas necesarias para cancelar la apertura de registros de precandidatos prevista para el día tres de febrero del año en curso; y del oficio de dos de febrero de dos mil tres signado por los integrantes del Servicio Electoral del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, dirigido a los Comités Auxiliares Delegacionales del Servicio Electoral del mencionado partido en la referida entidad federativa.

III. Por acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil tres, se tuvo por recibida en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral la queja señalada en el resultando anterior, ordenándose integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número JGE/QISF/CG/027/2003 y en atención a que estimó que sobreviene una causa de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 1, del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 15, párrafo 2, inciso e), del mismo ordenamiento, se procede a formular el dictamen correspondiente, al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

1.- Que en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, y sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente para ser sometido, previos los trámites a que se refieren los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la consideración del órgano superior de dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

2.- Que el artículo 85, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la integración de la Junta General Ejecutiva; y que el 86, párrafo 1, incisos d) y l), de dicho Código Electoral, consigna como facultad de este órgano colegiado, supervisar el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos políticos y sus prerrogativas, así como integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas y en su caso los de imposición de sanciones en los términos que establezca el citado ordenamiento legal.

3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Electoral Federal, es obligación de los partidos y agrupaciones políticas nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Quinto del ordenamiento legal invocado y que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

5.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código de la materia consigna como atribución del Consejo General, vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código Electoral y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

6.- Que atento a lo que dispone el artículo 3, párrafo 1, del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del presente Dictamen, resulta aplicable, en lo conducente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

7.- Que de la lectura del escrito inicial de queja o denuncia, se advierte que la promovente se refiere a distintos actos o hechos que imputa al partido político denunciado, que estima son contrarios a la normatividad interna del instituto político, y que la pretensión fundamental de la quejosa es que de acreditarse las irregularidades

denunciadas, este Instituto Federal Electoral proceda a tomar las medidas pertinentes a fin de restituir a la quejosa en el uso y goce del derecho político-electoral que supuestamente le fue conculcado por el partido político, además de que pretenden que se dejen sin efectos los resolutivos y acuerdos tomados por las instancias de dirección y de los órganos autónomos del Partido de la Revolución Democrática, para la selección de candidatos a cargos de elección popular.

Se considera que este Instituto Federal Electoral no tiene competencia para resolver sobre la pretensión que formula la quejosa, en tanto que a través del procedimiento administrativo de queja que nos ocupa, de resultar ciertos los hechos denunciados y verificar que los mismos son contrarios a la normatividad interna del partido político denunciado, solamente se podría aplicar alguna de las sanciones establecidas en el artículo 269, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin que en tal dispositivo se contemple la restitución a los ciudadanos en el uso y goce de los derechos político-electorales que, en su caso, haya conculcado un partido político con su actuación, ni la anulación de determinaciones tomadas al interior del partido político.

En efecto, el alcance de la resolución de fondo recaída en un procedimiento administrativo sancionador electoral, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concreta a la determinación de que se encuentre acreditada la comisión de una falta, infracción o irregularidad por el sujeto pasivo del procedimiento y, como consecuencia, la imposición de una sanción, teniendo en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, o bien, la desestimación de la queja o denuncia de mérito.

Al respecto, cabe destacar que la materia del procedimiento administrativo derivado de las quejas o denuncias a que se refiere el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se reduce a las posibles sanciones que deban imponerse a algún partido político o agrupación política por las irregularidades en que hubiesen incurrido, como se desprende del inicio del párrafo 1 de ese precepto, que expresamente establece que tal procedimiento es "Para los efectos del artículo anterior", en tanto que el artículo 269 sólo regula los tipos de sanciones y supuestos en que pueden imponerse sanciones a los partidos políticos y agrupaciones políticas, en el entendido de que ambos preceptos legales forman parte del Título Quinto del Libro Quinto del propio código electoral federal, denominado "De las Faltas Administrativas y de las Sanciones".

El artículo 269, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece:

“ARTÍCULO 269

1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser sancionados:

- a) Con amonestación pública;
- b) Con multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal;
- c) Con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución;
- d) Con la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que les corresponda por el período que señale la resolución;
- e) Con la negativa del registro de las candidaturas;
- f) Con la suspensión de su registro como partido político o agrupación política; y
- g) Con la cancelación de su registro como partido político o agrupación política.”

Por su parte, el artículo 270 del ordenamiento legal invocado, prevé:

“ARTÍCULO 270

1. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto Federal Electoral conocerá de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o una agrupación política.
2. Una vez que tenga conocimiento de la irregularidad, el Instituto emplazará al partido político o a la agrupación política, para que en el plazo de

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

cinco días conteste por escrito lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que considere pertinentes y, en su caso, la pericial contable. Si se considerase necesaria la pericial, ésta será con cargo al partido político o a la agrupación política.

3. Para la integración del expediente, se podrá solicitar la información y documentación con que cuenten las instancias competentes del propio Instituto.

4. Concluido el plazo a que se refiere el párrafo 2 de este artículo, se formulará el dictamen correspondiente, el cual se someterá al Consejo General del Instituto para su determinación.

5. El Consejo General del Instituto Federal Electoral, para **fijar la sanción correspondiente**, tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa.

6. Las resoluciones del Consejo General del Instituto, podrán ser recurridas ante el Tribunal Electoral, en los términos previstos por la ley de la materia.

7. Las multas que fije el Consejo General del Instituto, que no hubiesen sido recurridas, o bien, que fuesen confirmadas por el Tribunal Electoral, deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto en un plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa de la siguiente ministración del financiamiento público que corresponda.”

Como puede observarse, en tales preceptos no se encuentra prevista la restitución en el goce de los derechos político-electorales del ciudadano entre los efectos que pueda tener la resolución que recaiga en el procedimiento administrativo sancionador electoral en ellos establecido, razón por la cual, este Instituto resulta incompetente para pronunciarse sobre la pretensión que formula la quejosa, que esencialmente consiste en obtener la restitución en el uso y goce del derecho político-electoral que estima conculcado por parte del partido político denunciado.

De esta manera, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 15, párrafo 2, inciso e), del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece:

“Artículo 15

2. La queja o denuncia será improcedente:

...

e) Por la materia de los actos o hechos denunciados, aun y cuando se llegaran a acreditar, o por los sujetos denunciados, el Instituto resulte incompetente para conocer de los mismos; o cuando los actos, hechos u omisiones no constituyan violaciones al Código.”

Es importante tener presente que la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 15, párrafo 1, inciso e), del Reglamento invocado, hace referencia a la **materia de los actos o hechos denunciados**, señalando que aun y cuando se llegaran a acreditar, el Instituto resulte incompetente para conocer de los mismos.

En tal supuesto también se pueden ubicar las pretensiones de la quejosa, pues ningún efecto práctico tendría que este Instituto tramite y sustancie un procedimiento administrativo sancionador por impulso de un ciudadano en contra de algún partido o agrupación política, en el entendido de que la resolución que llegare a emitir sólo se limitaría a verificar si se acreditan o no las irregularidades denunciadas y, de ser procedente, imponer una sanción al instituto político infractor, cuando la verdadera pretensión del ciudadano es que se determine que un partido o agrupación política conculcó el derecho político-electoral del ciudadano, y se proceda a su restitución, sin que el Consejo General del Instituto Federal Electoral cuente con facultades legales para hacer tal declaración ni para dictar las medidas necesarias para restituir al ciudadano afectado en el uso y goce del derecho político-electoral violado, para lo cual sería indispensable restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la infracción cometida.

En el caso concreto, es evidente que aun cuando las irregularidades denunciadas por la quejosa se llegaran a acreditar, el Instituto Federal Electoral resulta incompetente para conocer respecto de la restitución de derechos político-electorales que pretende el ciudadano denunciante.

Así, lo procedente es desechar la presente queja con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 1, del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y

Procedimientos Electorales, que dispone que cuando se actualice alguno de los supuestos de improcedencia o sobreseimiento previstos en el mencionado Reglamento, el Secretario elaborará el proyecto de dictamen proponiendo lo conducente, en este caso, el desechamiento en atención a que la queja que nos ocupa no ha sido admitida.

No es obstáculo para concluir lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis relevante visible en la Revista *Justicia Electoral* 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 53-54, identificada con el rubro y texto siguientes:

“DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. SU VIOLACIÓN POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SÓLO FACULTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A IMPONER LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, SINO QUE LO CONSTRIÑE TAMBIÉN A RESTITUIR AL AFECTADO EN EL GOCE DEL DERECHO VIOLADO.—De una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 3o., párrafo 1; 22, párrafo 3; 38, párrafo 1, inciso a); 68, párrafo 1; 69, párrafo 1, inciso d); 73, párrafo 1, y 82, párrafo 1, incisos h) y w), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se arriba a la conclusión de que, en caso de una violación a los derechos político-electorales del ciudadano, por parte de un partido político, el Consejo General del Instituto Federal Electoral está facultado no sólo para la imposición de una sanción al infractor, sino también para realizar las providencias necesarias para restituir al quejoso en el uso y goce del derecho violado. En efecto, si se parte de la base de que la ley debe ser indefectiblemente observada por los partidos políticos nacionales, resulta que para el logro de los fines establecidos en el artículo 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, dichos partidos políticos nacionales quedan sujetos a las obligaciones que establece la legislación electoral y, concretamente, tienen el deber jurídico de respetar los derechos de los ciudadanos, según lo previsto por los artículos 22, párrafo 3, y 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por otra parte, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la responsabilidad de vigilar que los partidos políticos cumplan con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso a) de dicho cuerpo legal, en conformidad con lo dispuesto en los preceptos citados al principio. En consecuencia, si en concepto de esa autoridad electoral está

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

demostrado que el partido político conculcó el derecho político-electoral de un ciudadano, el Consejo General del Instituto Federal Electoral no solamente está facultado para imponer la sanción correspondiente, sino que también está constreñido a dictar las medidas necesarias para restituir al ciudadano afectado en el uso y goce del derecho político-electoral violado, que restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la infracción cometida, pues sólo de esta manera quedarán acatadas cabalmente las normas reguladoras de esa clase de derechos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2000.—Jesús López Constantino y Miguel Ángel Zúñiga Gómez.—30 de enero de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Disidentes: Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José de Jesús Orozco Henríquez.—Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.”

En la tesis relevante de referencia, la Sala Superior de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral arribó a la conclusión de que en caso de una violación a los derechos político-electorales del ciudadano por parte de un partido político, el Consejo General del Instituto Federal Electoral estaba facultado no sólo para la imposición de una sanción al infractor, sino también para realizar las providencias necesarias para restituir al quejoso en el uso y goce del derecho violado.

Tal criterio orientó las actuaciones de este Instituto, al conocer y resolver las distintas quejas presentadas por ciudadanos en contra de partidos o agrupaciones políticas cuya pretensión principal era lograr la restitución en el uso y goce de sus derechos político-electorales.

Sin embargo, la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sesión celebrada el veintisiete de febrero de dos mil tres, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-805/2002, determinó que el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 270 del código electoral federal, no es la vía para que los ciudadanos puedan obtener la restitución en el uso y goce de los derechos político-electorales que estimen conculcados por actos del partido político al que pertenezcan, utilizando como razonamiento principal que el Instituto Federal Electoral, a través del procedimiento de quejas genéricas, únicamente podía determinar si se acreditaba o no la irregularidad denunciada y, en su caso, proceder a la aplicación de la sanción correspondiente.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

La Sala Superior precisó que con anterioridad al resolver diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra de resoluciones dictadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con motivo de distintos procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por posibles infracciones legales o estatutarias imputadas por los ciudadanos entonces quejosos a ciertos partidos políticos, había considerado que tales juicios eran procedentes, particularmente cuando entre las pretensiones de los ciudadanos actores se encontraba la restitución de sus derechos político-electorales supuestamente violados por tales partidos políticos cuando la autoridad electoral responsable se hubiese abstenido de dictar medida alguna en ese tipo de procedimientos para protegerlos.

De lo anterior se advierte que la mencionada Sala Superior abandonó su criterio en el sentido de que el Instituto Federal Electoral tiene facultades para restituir derechos político-electorales de los ciudadanos a través del procedimiento sancionador administrativo, por lo que dicha pretensión, con base en el nuevo criterio del órgano jurisdiccional electoral, únicamente se puede obtener mediante la presentación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Ante tales circunstancias, este Instituto Federal Electoral en acatamiento al principio de legalidad, consistente en que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite, constriñe su actuar a lo dispuesto en los artículos 269, párrafo 1 y 270 del código electoral federal.

En consecuencia, el Instituto Federal Electoral a través de la substanciación del procedimiento administrativo sancionador sólo puede determinar si el partido o agrupación política denunciada incurrió en alguna violación a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales o de la normatividad interna de tales institutos políticos y, en su caso, proceder a la imposición de la sanción que se estime pertinente, del catálogo contenido en el artículo 269, párrafo 1, del mencionado ordenamiento legal.

Se considera conveniente destacar que con la posición adoptada por este Instituto Federal Electoral, de manera alguna se deja en estado de indefensión a los ciudadanos que pretenden la restitución en el uso y goce de los derechos político-electorales que estimen vulnerados por actos o determinaciones de un partido o agrupación política nacional, pues la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-805/2002, estableció que la vía idónea para plantear tales pretensiones es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

En efecto, en la resolución de referencia, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral sostuvo:

“... con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, fracciones V y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, 80 y 84, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando un ciudadano pretenda la restitución de sus derechos político-electorales ante su supuesta violación por parte de algún partido político, no debe acudir a formular la queja o denuncia a que se refiere el invocado artículo 270 del código electoral federal sino, más bien, promover directamente un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra del primer acto de autoridad electoral que asuma como válido, pudiendo rechazarlo, el respectivo acto definitivo del partido político nacional, o bien, directamente este último en ciertos casos específicos según los términos previstos legalmente que, desde la perspectiva del actor, se traduzca en la posible violación a su derecho político-electoral, en el entendido de que la sentencia correspondiente tendrá como efecto confirmar o, en su caso, revocar o modificar el acto o resolución impugnado y, consecuentemente, proveer lo necesario para reparar la violación constitucional que se haya cometido, con el objeto de que queden salvaguardados de mejor manera los derechos de defensa y a un debido proceso legal tanto de los ciudadanos actores como del respectivo partido político.

En este orden de ideas, cuando un ciudadano estime que determinado partido político nacional cometió alguna falta, irregularidad o infracción a la normativa estatutaria partidaria y, como consecuencia de ello, le violó su derecho político-electoral de votar, ser votado, asociación o afiliación, se encuentra legitimado y tiene interés jurídico para promover en defensa de sus intereses lo siguiente, según cuál sea su pretensión:

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

a) Si el ciudadano pretende que el partido político nacional sea sancionado por la supuesta comisión de una falta, irregularidad o infracción a la normativa estatutaria partidaria, deberá interponer una queja o denuncia ante el Instituto Federal Electoral, en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como se mencionó, el objeto de una resolución de fondo en el procedimiento administrativo sancionador electoral se concreta a la determinación acerca de si se ha acreditado o no la comisión de una falta, infracción o irregularidad por el sujeto pasivo del respectivo procedimiento administrativo y, en caso afirmativo, la imposición de una sanción al responsable, teniendo en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. En su oportunidad, la resolución que recaiga al respectivo procedimiento administrativo sancionador electoral, como se indicó, podrá ser impugnada por el propio ciudadano quejoso a través del recurso de apelación ante este órgano jurisdiccional, dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a que tenga conocimiento del acto impugnado o que el mismo le sea notificado conforme con la ley, y la sentencia correspondiente tendrá como efecto confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada;

b) Si el ciudadano pretende la restitución en el uso y goce de su derecho político-electoral supuestamente violado, en cambio, deberá promover juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra del primer acto de autoridad electoral que asuma como válido, pudiendo rechazarlo, el respectivo acto definitivo del partido político nacional, o bien, directamente este último en ciertos casos específicos según los términos previstos legalmente que, desde la perspectiva del actor, se traduzca en la posible violación a su derecho político-electoral, en el entendido de que la sentencia correspondiente tendrá como efecto confirmar o, en su caso, revocar o modificar el acto o resolución impugnado y, consecuentemente, proveer lo necesario para reparar la violación constitucional que se haya cometido, y

c) Si el ciudadano pretende tanto la sanción del partido político nacional infractor como la restitución en el uso y goce de su derecho político-electoral supuestamente violado, deberá

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

promover con antelación el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano mencionado en el inciso b) precedente y, una vez resuelto este último, podrá promover por separado y ante la instancia competente, la queja o denuncia a que se refiere el inciso a) que antecede.

No escapa a este órgano jurisdiccional que en diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano previos, promovidos en contra de resoluciones dictadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, con motivo de distintos procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por posibles infracciones legales o estatutarias imputadas por los ciudadanos entonces quejosos a ciertos partidos políticos, esta Sala Superior consideró que tales juicios eran procedentes, particularmente cuando entre las pretensiones de los ciudadanos actores se encontraba la restitución de sus derechos político-electorales supuestamente violados por tales partidos políticos cuando la autoridad electoral responsable se hubiese abstenido de dictar medida alguna en ese tipo de procedimientos para protegerlos.

Sin embargo, un nuevo examen de todas las disposiciones constitucionales y legales aplicables, así como de su interpretación sistemática y funcional, además de la experiencia derivada de la instrucción y resolución de diversos procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral y las eventuales impugnaciones promovidas sobre el particular, lleva a considerar a esta Sala Superior, como una consecuencia necesaria de lo argumentado en los párrafos precedentes, que se debe considerar procedente al recurso de apelación en este tipo de casos, con el objeto de garantizar de mejor manera la seguridad jurídica de los justiciables, así como sus derechos de defensa y debido proceso legal, además de simplificar y dar mayor claridad, objetividad y certeza al sistema de medios de impugnación en materia electoral, asegurando igualmente la mayor funcionalidad y operatividad del propio sistema.”

Con base en lo antes razonado, procede el desechamiento de la presente queja.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

A mayor abundamiento, debe resaltarse que aun en el supuesto de que esta autoridad sostuviera que tiene competencia para conocer sobre la restitución de derechos político-electorales de los ciudadanos que puedan haber sido violentados por algún partido o agrupación política con base en el criterio contenido en la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el rubro **“DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. SU VIOLACIÓN POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SÓLO FACULTA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL A IMPONER LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, SINO QUE LO CONSTRIÑE TAMBIÉN A RESTITUIR AL AFECTADO EN EL GOCE DEL DERECHO VIOLADO”**, lo cierto es que esta autoridad administrativa electoral se encontraría impedida para conocer del estudio de fondo de la cuestión planteada, en tanto que la ciudadana quejosa no agotó las instancias internas previstas en la normatividad del partido político denunciado, antes de acudir a esta autoridad, como se evidencia a continuación:

La ciudadana quejosa esencialmente argumenta que el partido político denunciado no observó la regulación jurídica interna contenida en los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática y en el Reglamento General de Elecciones y Consultas, en el proceso de selección de candidatos al puesto de elección popular de Jefatura Delegacional en Magdalena Contreras, Distrito Federal.

Las irregularidades que denuncia la quejosa son susceptibles de ser conocidas por los órganos internos del partido político denunciado, a través de los medios de defensa previstos en su normatividad.

Debe tomarse en cuenta que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen, entre otros fines, el de promover la participación del pueblo en la vida democrática y el hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan. Es así que la actuación de los partidos políticos queda sujeta a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido los partidos políticos nacionales rigen sus actos y vida interna de conformidad con su declaración de principios, programa de acción y fundamentalmente con apoyo en sus estatutos, tal y como se desprende de los artículos 24, 25, 26 y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dicen:

“ARTÍCULO 24

1. *Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, deberá cumplir los siguientes requisitos:*

a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción y los estatutos que normen sus actividades; y

...

ARTÍCULO 25

1. *La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:*

a) *La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen;*

b) *Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;*

c) *La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que este Código prohíbe financiar a los partidos políticos; y*

d) *La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.*

ARTÍCULO 26

1. *El programa de acción determinará las medidas para:*

a) *Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de principios;*

b) *Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;*

c) *Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiéndoles el respeto al adversario y a sus derechos en la lucha política; y*

d) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales.

ARTÍCULO 27

1. Los estatutos establecerán:

a) La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el de poder ser integrante de los órganos directivos;

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

I. Una asamblea nacional o equivalente;

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido;

III. Comités o equivalentes en las entidades federativas; y

IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña a que se refiere el párrafo 1 del artículo 49-A de este Código.

d) Las normas para la postulación democrática de sus candidatos;

e) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que participe, sustentada en su declaración de principios y programas de acción;

f) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral durante la campaña electoral en que participen; y

g) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa.”

En este entendido, tanto los órganos internos, como los militantes del Partido de la Revolución Democrática se encuentran constreñidos en su actuación a la observancia de sus documentos básicos. Respecto de los candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos deben contar con normas concretas que regulen su selección y posterior postulación.

El Estatuto del Partido de la Revolución Democrática en el artículo 13 se refiere a la elección de candidatos a cargos de elección popular; por su parte, los artículos 18 y 20 las facultades y obligaciones de las Comisiones Nacional y Estatal de Garantías y Vigilancia, disposiciones que, en lo medular, señalan:

“ARTÍCULO 13º. La elección de los candidatos 1. Podrán votar en las elecciones internas de candidaturas del Partido los miembros del mismo con una antigüedad de por lo menos seis meses a la fecha de la elección. Los lugares de votación corresponderán estrictamente a los comités de base territoriales del Partido y ninguna casilla podrá instalarse fuera del territorio asignado al correspondiente comité de base territorial.

2. Ningún miembro del Partido podrá votar fuera de la casilla que le corresponda de conformidad con el numeral anterior.

3. Las elecciones de candidaturas uninominales a puestos de elección popular se llevarán a cabo de conformidad con la convocatoria. Cuando un consejo estatal se abstenga de emitir la convocatoria en el momento procesal requerido por el reglamento del Partido y la fecha de la elección constitucional, el Comité Ejecutivo Nacional asumirá esta función.

4. Se elegirán mediante voto directo, secreto y universal las candidaturas a:

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

- a. La Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos;*
- b. Las gubernaturas de los estados de la Unión y la jefatura de gobierno del Distrito Federal;*
- c. Las presidencias municipales y jefaturas delegaciones del Distrito Federal;*
- d. Las diputaciones y senadurías al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa;*
- e. Las diputaciones a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa.*

5. Las candidaturas externas serán nombradas de la siguiente manera:

a. El Consejo Nacional y los consejos estatales podrán nombrar candidatos externos hasta en un veinte por ciento del total de las candidaturas que deba postular el Partido a un mismo órgano del Estado, excepto si por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes presentes de los Consejos se decide ampliar el porcentaje.

b. Corresponderá al Consejo Nacional elegir a los candidatos externos a Presidente de la República, senadores y diputados federales.

c. Corresponderá a los consejos estatales elegir a los candidatos externos a gobernador, diputados locales e integrantes de las planillas municipales.

6. Los requisitos que deberá llenar el candidato externo son:

- a. Dar su consentimiento por escrito;*
- b. Comprometerse a no renunciar a la candidatura;*
- c. Suscribir un compromiso político público con la dirección nacional del Partido en procesos federales y con la dirección estatal en los procesos locales;*
- d. Promover durante la campaña la plataforma electoral y el voto en favor del Partido;*
- e. Durante la campaña, coordinarse con los órganos políticos o instancias electorales del Partido y, en*

caso de existir diferencias, canalizarlas a través de los órganos y procedimientos que correspondan;

f. De resultar electos, respetar los postulados políticos y programáticos del Partido, así como las normas y lineamientos que el Partido acuerde para el desempeño de su cargo;

g. En el caso de ciudadanos que hayan sido dirigentes, representantes públicos o funcionarios de gobierno de otros partidos, sólo podrán ser postulados como candidatos externos del PRD, siempre y cuando no hayan sido responsables de hechos de represión, corrupción o narcotráfico;

h. Los candidatos externos que resulten elegidos legisladores formarán parte del grupo parlamentario del PRD, cumpliendo con las normas y lineamientos respectivos. Tendrán derecho, por otra parte, a participar, en igualdad de condiciones, en los órganos de discusión, decisión y dirección del grupo parlamentario del Partido.

7. Por decisión del consejo convocante, los aspirantes externos podrán competir con miembros del Partido en las elecciones internas de candidaturas, en cuyo caso dicho consejo proveerá lo necesario para el registro correspondiente sin necesidad de cubrir los requisitos reglamentarios.

8. No podrá considerarse a ningún miembro del Partido en candidaturas externas.

9. Las elecciones de candidaturas a diputados y senadores plurinominales, así como de regidurías y sindicaturas serán organizadas por la mesa directiva del consejo correspondiente y por el comité ejecutivo municipal en el caso de los municipios. Las convenciones para elegir candidatos plurinominales serán presididas por el comité ejecutivo correspondiente.

10. Las candidaturas a diputados federales y locales, y a senadurías por el principio de

representación proporcional se elegirán de la siguiente manera:

a. La mitad de las listas, con los numerales nones, serán elegidos en convención electoral convocada por el consejo correspondiente; b. La otra mitad de las listas, con los numerales pares, serán elegidos directamente por el consejo que corresponda; c. Por cada bloque de diez candidaturas a diputados de representación proporcional habrá por lo menos un representante de los pueblos indios, en las entidades donde exista población indígena.

11. Las candidaturas a regidores y síndicos de los ayuntamientos se elegirán en el consejo municipal, de conformidad con el reglamento que al efecto expida el Consejo Estatal, tomando en cuenta las características de las leyes locales de la materia y los siguientes criterios:

a. Las listas de regidores de representación proporcional o de planilla se confeccionarán respetando la regla de género y de edad, así como las disposiciones reglamentarias referentes a los integrantes de los pueblos indios;

b. El sistema de elección permitirá la aplicación de un método de representación de las minorías, de tal manera que la planilla de candidatos sea siempre incluyente. Para obtener representación en la planilla, se deberán obtener mínimamente el porcentaje que se requiera para alcanzar una regiduría en el municipio de que se trate.

c. Las candidaturas a síndicos serán elegidas por el consejo municipal mediante el sistema de mayoría relativa de votos.

12. El reglamento definirá condiciones de equidad en las contiendas internas para elegir candidaturas. Los consejos podrán determinar una contribución del Partido a los precandidatos para el desarrollo de sus precampañas, pero siempre en condiciones de igualdad entre ellos.

13. *La falta de candidaturas en todo nivel, cualquiera que sea su causa, será superada mediante designación a cargo del Comité Ejecutivo Nacional.*

14. *Los candidatos del Partido a puestos de elección popular estarán obligados a sostener y difundir la plataforma electoral aprobada por el Partido durante la campaña electoral en la que participen.”*

“Artículo 18º. Los órganos de garantías y vigilancia

1. *Los Consejos Nacional y Estatales del Partido designarán en sus respectivos ámbitos de competencia a los órganos jurisdiccionales encargados de garantizar los derechos de los afiliados del Partido y vigilar la aplicación del presente Estatuto, los cuales se denominarán <<comisiones de garantías y vigilancia>>. En el desempeño de sus actividades, estas comisiones se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.*

2. *Estas comisiones deberán atender en todo momento el fondo de los asuntos que se les planteen. Sus resoluciones serán de acatamiento obligatorio para los afiliados y órganos del Partido.*

3. *Las comisiones nacional y estatales de garantías y vigilancia se integrarán de acuerdo con las bases siguientes:*

(...)

7. *Las comisiones nacional y estatales de garantías y vigilancia tendrán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes atribuciones:*

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

a. Proteger los derechos de los miembros del Partido;

b. Determinar las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros y órganos del Partido;

c. Garantizar el cumplimiento de este Estatuto;

d. Aplicar las sanciones estatutarias y reglamentarias;

e. Resolver consultas y controversias sobre la aplicación de este Estatuto;

f. Requerir la información necesaria para el desempeño de sus funciones.

9. La Comisión de Nacional de Garantías y Vigilancia conocerá:

a. De las quejas por actos u omisiones de los integrantes de los órganos nacionales, en única instancia;

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales o municipales en segunda instancia después de la resolución correspondiente de la Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia, o cuando ésta no haya sido integrada o no dictase resolución en sesenta días a partir de la presentación del escrito de queja, en única instancia;

c. De las quejas, consultas o controversias de significado nacional, en única instancia.

10. Las comisiones estatales de garantías y vigilancia conocerán:

a. De las quejas por actos u omisiones de los integrantes de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

b. De las quejas por actos u omisiones de los órganos estatales y municipales, en primera instancia;

c. De las quejas, consultas y controversias de significado estatal y municipal, en primera instancia.

Artículo 20º. Procedimientos y sanciones

1. Todo miembro o instancia del Partido podrá ocurrir ante las comisiones de garantías y vigilancia para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas estatutarias, cuando estime que han sido violados o vulnerados por órgano, instancia de dirección, de representación o por alguna resolución de cualquiera de éstos; por sus integrantes o cualquier miembro, mediante la presentación del escrito de queja.

2. Las comisiones de garantías y vigilancia sólo podrán actuar a petición de parte interesada, siempre y cuando sean miembros, órganos o instancias del Partido.

3. Cualquiera de las partes afectadas por resoluciones de las comisiones estatales podrá interponer recurso de apelación ante la Comisión Nacional, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se comunicó legalmente la resolución. El recurso de apelación deberá ser resuelto dentro de los treinta días hábiles siguientes a que la comisión reciba el expediente relativo, salvo en casos urgentes, que se resolverán correspondientemente.

4. Las resoluciones de las comisiones estatales que no sean apeladas en los términos del artículo

anterior, así como las emitidas por la Comisión Nacional, serán inatacables.”

Por su parte, el Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática regula la selección interna de candidatos a cargos de elección popular, el cual, en lo conducente, establece:

*“**Artículo 1.** El presente ordenamiento regula lo relativo a los procesos electorales internos y de consulta establecidos en el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática.*

***Artículo 2.** La función de organizar los procesos electorales y de consulta corresponde al Servicio Electoral del Partido, en los términos del Estatuto y del presente Reglamento.*

Los órganos del Partido en todos sus niveles están obligados a prestar el apoyo que les solicite el Servicio Electoral para el desempeño de sus funciones. Pondrán a disposición del órgano respectivo los recursos financieros aprobados por los Consejos respectivos.

***Artículo 3.** Las convocatorias a elecciones se circunscribirán exclusivamente a establecer las condiciones específicas de la elección que se prevén para las mismas en el Estatuto y este Reglamento.*

Título tercero De la elección de candidatos a puesto de elección popular
Capítulo primero De la convocatoria

***Artículo 19.** La convocatoria para elegir candidatos a puestos de elección popular deberá publicarse a más tardar 90 días antes del inicio del plazo para el registro de candidatos previsto en la ley electoral respectiva, debiendo señalar lo siguiente:*

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

a) *La fecha de la elección, que deberá ser a más tardar 30 días antes del inicio del plazo para el registro de candidatos previsto en la ley electoral respectiva.*

b) *Las fechas de registro de candidaturas, con un plazo de 7 días para ello;*

c) *Las candidaturas a elegir;*

d) *La reserva de candidaturas externas; y*

e) *Las candidaturas sujetas a plebiscito electivo.*

Si un Consejo Estatal omite emitir la convocatoria respectiva dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, el Comité Ejecutivo Nacional la emitirá en su lugar, a más tardar 75 días antes del inicio del plazo para el registro de candidatos previsto en la ley electoral respectiva.

Capítulo segundo De los candidatos electos por el principio de mayoría relativa

Artículo 20. *Las candidaturas a cargos de elección popular que de acuerdo a las normas electorales se elijan por el principio de mayoría relativa se registrarán en lo individual o por fórmula según lo dispongan la ley electoral, y aparecerán en una sola boleta de acuerdo al tipo de elección.*

Capítulo tercero De la elección de candidatos en las convenciones electorales

Artículo 21. *Para la elección de la mitad de las candidaturas a Diputados Federales y a Senadores por el principio de representación proporcional el Consejo Nacional emitirá la convocatoria para la integración y celebración de la Convención Nacional.*

Para la elección de la mitad de las candidaturas a Diputados Locales por el principio de representación proporcional los Consejos Estatales emitirán la

convocatoria para la integración y celebración de la Convención Estatal.

En las convenciones electorales cada integrante podrá votar hasta por la octava parte de las candidaturas a elegir.

Título cuarto Del plebiscito y referéndum

Capítulo primero Del plebiscito electivo

Artículo 22. Los Consejos Nacional y Estatales al emitir la convocatoria para la elección de candidatos a puestos de elección popular podrán establecer que determinadas candidaturas se elijan por plebiscito electivo. La elección de candidatos a puestos de elección popular tendrá el carácter de plebiscito electivo cuando:

- a) Se someta al voto de la ciudadanía en general y miembros del partido dos o más precandidaturas de miembros del Partido;*
- b) Participen precandidatos que no sean miembros del Partido. En este caso, el método de consulta directa podrá ser exclusivamente a los miembros del Partido o a la ciudadanía en general.*

Los miembros del partido y los ciudadanos votaran en la casilla que corresponda a su sección electoral.

Artículo 31. El Comité Nacional del Servicio Electoral tiene las atribuciones siguientes:

...

c) Coordinar la organización de las elecciones internas para la postulación de candidatos de elección popular en el ámbito federal y de las elecciones locales concurrentes;

d) Registrar candidatos y precandidatos para los procesos electorales internos a elegir en el ámbito nacional;

...

i) Conocer de las impugnaciones contra actos o resoluciones de los Comités Estatales del Servicio Electoral;

j) Turnar a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia los recursos que se presenten en contra de sus propios actos;

...

Artículo 32. Los Comités Estatales del Servicio Electoral tienen las atribuciones siguientes:

..

b) Coordinar la organización de las elecciones internas para la postulación de candidatos de elección popular en el ámbito estatal y de las elecciones locales;

...

f) Registrar candidatos y precandidatos para los procesos electorales internos a elegir en el ámbito estatal y municipal;

g) Realizar los cómputos de carácter estatal de las elecciones o procesos de consulta;

h) Emitir las constancias de mayoría o de asignación y las declaraciones de validez que le correspondan;

i) Conocer de los recursos de revisión contra actos o resoluciones de los Comités municipales auxiliares del servicio electoral;

j) Turnar a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia los recursos que se presenten en contra de sus cómputos totales de elección o consulta;

k) Turnar al Comité Nacional del Servicio Electoral los recursos que se presenten en contra de sus propios actos;

...

Artículo 33. Los Comités Municipales Auxiliares del Servicio Electoral tienen las atribuciones siguientes:

a) Proponer a los Comités Estatales del Servicio Electoral el número y ubicación de las casillas

electorales para los procesos electorales y de consulta internos;

b) Recibir y remitir al Comité Estatal las solicitudes de registro de candidatos y precandidatos para los procesos electorales internos a elegir en el ámbito municipal;

c) Realizar los cómputos de las casillas instaladas en el municipio de las elecciones o procesos de consulta;

d) Las demás establecidas en el Estatuto y en este Reglamento.

Capítulo segundo Del registro de candidatos

Artículo 35. *Dentro del plazo señalado por la convocatoria respectiva para el registro de candidatos el Servicio Electoral encargado de realizar el registro extenderá acuse de recibo con número de folio y fecha de la solicitud y los documentos que la acompañen.*

La solicitud de registro de candidatos o precandidatos deberán especificar los datos siguientes:

a) Apellidos y nombre completo;

b) Lugar y fecha de nacimiento;

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;

d) Cargo para el que se postula;

e) Señalar la calidad personal respecto de las acciones afirmativas.

La solicitud se acompañará de la declaración de aceptación de la candidatura, de una copia de la credencial de elector con fotografía, los recibos de sus cuotas ordinarias. Para precandidatos en relación con puestos de elección popular además la documentación que se requiera para acreditar los requisitos exigidos por la ley electoral respectiva.

El órgano electoral comprobará la vigencia de derechos de los miembros con base en los informes

que les envíe las Comisiones de Garantías y Vigilancia.

Artículo 36. *Dentro de los dos días siguientes al vencimiento del plazo para el registro de candidatos los órganos del Servicio Electoral facultados para ello celebrarán sesión con el único objeto de resolver las solicitudes de registro de candidaturas o precandidaturas, extendiendo constancia de ello a los interesados.*

...

Título noveno Medios de defensa Capítulo primero De la calificación de las elecciones

Artículo 57. *Para garantizar que los actos y resoluciones del Servicio Electoral se apeguen al Estatuto y a este Reglamento los candidatos y precandidatos a través de sus representantes cuentan con los siguientes medios de defensa:*

- a) Las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones de los Comités Municipales y Estatales del Servicio Electoral, mismo del que resolverá el superior jerárquico;*
- b) Las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones del Comité Nacional del Servicio Electoral, del cual conocerá la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.*
- c) Las impugnaciones en contra de los cómputos totales de las elecciones y procesos de consulta, de la que resolverá la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia.*

Los actos de preparación de la elección, aun los tomados por los órganos de dirección o representación del partido, se ventilaran en forma sumaria ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, con excepción con los señalados en el inciso a) del presente artículo.

Artículo 58. *Durante el proceso electoral interno todos los días son hábiles, lo cual es aplicable a todos los plazos señalados en este Reglamento. Los días se considerarán de veinticuatro horas y los plazos por horas se contarán de momento a momento.*

Las impugnaciones deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada.

Artículo 59. *La impugnación se interpondrá ante el Comité del Servicio Electoral responsable del acto, si se presentase ante diferente Comité del Servicio Electoral o ante la Comisión de Garantías y Vigilancia, esta la tendrá por recibido y lo remitirá de inmediato al Comité del Servicio Electoral que corresponda, quienes lo harán publico por estrados.*

Las impugnaciones que se presenten deberán señalar:

- a) El nombre de quien promueve y firma autógrafa;*
- b) Señalar el acto o resolución impugnado y la instancia responsable del mismo;*
- c) Mencionar de los hechos en que se basa la impugnación;*
- d) Señalar las pruebas que respalden la impugnación; y*
- e) Cuando se impugne el resultado final de una elección se deberá señalar la elección que se impugna, identificar cada una de las casillas cuya votación impugna y las causas por las que se impugna.*

Al recibir el recurso de impugnación, el órgano electoral en un plazo de 24 horas dará aviso de la interposición del recurso al Comité Nacional del Servicio Electoral o a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia según corresponda; y en el mismo plazo publicará, mediante cédula de

notificación en los estrados de ese órgano, el acuerdo mediante el cual se da a conocer la presentación del recurso, fijando un plazo de 48 horas para quienes se consideren terceros interesados, presenten su escrito de terceros, acreditando la personalidad y el interés jurídico.

Se remitirá el expediente de impugnación en un plazo de 72 horas contados a partir de la publicación en estrados, acompañándolo con el escrito inicial y sus anexos, con el escrito del tercero interesado en su caso y sus anexos y con el informe justificado del Servicio Electoral, acompañando el expediente original de las casillas impugnadas con los documentos que integran el expediente de la elección.

***Artículo 61.* Las impugnaciones deberán resolverse en la siguiente sesión ordinaria a la que se reciban, cuando sean competencia de los Comités del Servicio Electoral.**

Las impugnaciones de la competencia del la Comisión de Garantías y Vigilancia se resolverán en términos siguientes:

- a) Las que se reciban antes de la jornada electoral deberán resolverse dentro de los seis días siguientes a su admisión;***
- b) Las que se presenten en contra de resultados finales de las elecciones relativas a la renovación de los órganos del Partido se deberán resolver diez días antes de la toma de posesión respectiva;***
- c) Las que se presenten en contra de los resultados finales de las elecciones en relación con la postulación de candidatos a cargos de elección popular, deberán resolverse antes del inicio del plazo de registro de candidatos respectivos, de acuerdo a lo dispuesto por las leyes electorales;***
- d) Las que se presenten en contra de registros de candidatos o precandidatos para participar en la***

elección interna, deberán resolverse tres días antes de la jornada electoral interna.

Artículo 62. *Los efectos de las resoluciones que recaigan a las impugnaciones podrán tener los efectos siguientes:*

- a) Confirmar el acto o resolución impugnada;*
- b) Revocar el acto o resolución impugnada;*
- c) Modificar el cómputo final de la elección impugnada por actualizarse la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas;*
- d) Revocar la constancia de mayoría o asignación respectivas, cuando por consecuencia de lo previsto en el inciso anterior otro u otros candidato obtenga la mayoría relativa de votos y les corresponda la constancia de mayoría o asignación;*
- e) Declarar la nulidad de la elección que se impugna;*
- f) Declarar la inelegibilidad de los candidatos o precandidatos; y Las sentencias que recaigan a las impugnaciones que resuelva la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia serán definitivas.”*

Como se advierte, el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, así como el Reglamento General de Elecciones y Consultas establecen las disposiciones relacionadas con el órgano encargado de organizar las elecciones y sus atribuciones, la expedición de la convocatoria a elección de candidatos a cargos de elección popular, ya sean por los principios de mayoría relativa o representación proporcional, los métodos de selección de candidatos, los medios de defensa con que cuentan los miembros del Partido de la Revolución Democrática para impugnar los actos relacionados con la selección interna de candidatos. Observándose que corresponde a la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia resolver las impugnaciones presentadas en contra de actos relacionados con la preparación de la elección, estableciéndose los plazos para promover tales medios de defensa y su resolución.

Asimismo, de las normas transcritas se desprenden los derechos con que cuenta todo afiliado a ocurrir ante las Comisiones de Garantías y Vigilancia para hacer valer sus derechos o exigir el cumplimiento de las normas estatutarias, cuando estime que han sido violados o vulnerados por un órgano, instancia de dirección, de representación o

por alguna resolución de cualquiera de éstos, por sus integrantes o cualquier afiliado, mediante la presentación del escrito de queja, en cuyo caso sólo podrán actuar a petición de parte interesada.

Además, las resoluciones emitidas por las Comisiones Estatales de Garantías de conformidad con el artículo 20, párrafo 3 del estatuto del Partido de la Revolución Democrática son susceptibles de ser apeladas ante la Comisión Nacional, cuyas resoluciones sí tendrán en consecuencia el carácter de definitivas e inatacables, como lo prevé el párrafo 4 de la norma antes mencionada.

Se advierte, en consecuencia, que los afiliados del partido denunciado cuentan de manera expresa y clara con los medios de defensa y de protección a sus derechos, que permiten defender en el seno del partido mismo la legalidad de los actos de sus órganos internos, concretamente para inconformarse con actos o resoluciones relacionados con el proceso de selección interna de candidatos.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que dentro de las obligaciones que tienen los partidos políticos se encuentra la prevista en el artículo 38, párrafo 1, inciso f), que a la letra dice:

“Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

(...)

f) Mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios;

(...)”

Tal obligación permite que las Comisiones de Garantías y Vigilancia se encuentren en todo momento expeditas para conocer de las presuntas irregularidades, incumplimientos u omisiones que generen agravio a sus afiliados, para efecto de proteger los derechos legales y estatutarios de los mismos. Considerar que no es necesario acudir a instancias internas conllevaría a dejar sin vigencia los órganos estatutarios expresamente creados para tales fines.

En este sentido, también los militantes o afiliados tienen el deber de observar sus normas estatutarias, como lo es el recurrir ante las instancias internas para dirimir los conflictos que surjan al interior del partido, como lo prevé el artículo 2, inciso a) y b) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, que a la letra dice:

“Artículo 2

Todo miembro del Partido esta obligado a:

a). Conocer y respetar la Declaración de Principios, el Programa, la línea política, el presente Estatuto y los demás acuerdos del Partido.

b). Canalizar a través de las instancias internas, del Partido sus inconformidades, acusaciones, denuncias o quejas contra otros miembros del Partido, organizaciones y órganos del mismo.

(...)”

En el caso que nos ocupa, la quejosa no argumenta ni exhibe documentación alguna tendiente a demostrar que acudió a las instancias internas del partido denunciado a hacer valer las irregularidades de que se duele en la presente queja, concretamente en contra de los actos o determinaciones relacionadas con el proceso de selección interna de candidatos del Partido de la Revolución Democrática a cargos de elección popular.

En consecuencia, este Instituto como garante del fortalecimiento del régimen de partidos y respetuoso del principio de legalidad que debe imperar en el actuar cotidiano de los partidos políticos, como parte de los fines a que se encuentra sujeto de conformidad con el artículo 69, en relación con el artículo 82, párrafo 1, inciso h) ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, llega a la convicción de que en el caso que nos ocupa no es posible entrar al estudio de los hechos planteados por la quejosa, en atención a que no agotó las instancias internas contempladas en el estatuto del partido denunciado, mediante las cuales hubiese podido obtener la modificación o revocación de los actos que denuncia ante esta autoridad electoral administrativa.

Debe dejarse en claro que considerar que no es necesario acudir a las instancias internas de los partidos políticos antes de presentar queja o denuncia ante esta autoridad, generaría que los propios afiliados del Partido de la Revolución Democrática incumplan la obligación prevista en el artículo 2 de su estatuto y, siendo que los miembros o afiliados son el fundamento y pilar del instituto político como principales obligados al respeto irrestricto de sus documentos básicos, no es jurídicamente válido permitir una indiferencia e ignorancia de la obligación de recurrir en vía primaria a las instancias previamente establecidas por el Partido denunciado, como lo son las comisiones de garantías y vigilancia.

En adición a lo anterior, el artículo 3, párrafo 1, del reglamento aplicable en la sustanciación de los procedimientos administrativos prevé la aplicación de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en lo que no se encuentre previsto.

Lo anterior reviste importancia, en virtud de que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prevé en el artículo 10, párrafo 1, inciso d) el principio de definitividad que expresa:

“ARTÍCULO 10

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los siguientes casos:

(...)

d) Que no se hayan agotado las instancias previas establecidas por las leyes, federales o locales, según corresponda, para combatir los actos o resoluciones electorales y en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado, y...”

El citado precepto resulta aplicable al procedimiento sancionatorio de mérito, en virtud de que el supuesto previsto en el inciso d) que se menciona no se encuentra considerado en el reglamento de la materia, situación que genera, la aplicación

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

supletoria del principio de definitividad citado, de conformidad con el artículo 3 reglamentario.

En consecuencia, aun cuando esta autoridad electoral administrativa tuviera facultades para pronunciarse sobre la restitución de derechos político-electorales de los ciudadanos que hubiesen sido conculcados por partidos políticos, estaría imposibilitada para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada, pues se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1 inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al procedimiento administrativo en que se actúa, por no haber agotado la quejosa las instancias previas previstas por los artículos 18 y 20 del estatuto del partido denunciado.

En mérito de lo expuesto, se declara el desechamiento de la presente queja.

8.- Que en virtud de que la quejosa pretende la restitución de derechos político-electorales que estima conculcados por el partido político denunciado, y en atención a que como ha quedado evidenciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la autoridad competente para conocer de esa clase de pretensiones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, remítase el presente expediente a la Sala Superior para los efectos legales a que haya lugar, dejando copia certificada del mismo en el archivo de esta autoridad.

Una vez que haya resuelto lo conducente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta autoridad podrá iniciar el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones, relacionado con las irregularidades que el ciudadano imputa al partido político, en el entendido de que en la resolución que se llegue a emitir, de acreditarse las faltas imputadas, sólo podrá determinar sancionar al instituto político de que se trate en términos de lo dispuesto por el artículo 269, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**JUNTA GENERAL EJECUTIVA
EXP. JGE/QISF/CG/027/2003**

9.- Que en atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 270 y 271 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el artículo 43 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el numeral 15 de los Lineamientos para el Conocimiento y la Sustanciación de los Procedimientos de las Faltas Administrativas, y en ejercicio de la atribución conferida por los numerales 85, párrafo 1 y 86, párrafo 1, incisos d) y l), del Código invocado, la Junta General Ejecutiva emite el siguiente:

D I C T A M E N

PRIMERO.- Se desecha la queja presentada por la C. Iris Santacruz Fabila en contra del Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo señalado en el considerando séptimo del presente dictamen.

SEGUNDO.- En su oportunidad, remítase el presente expediente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales a que haya lugar, en términos de lo señalado en el considerando octavo del presente dictamen.

TERCERO.- Remítase el presente dictamen a los integrantes de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución, en términos de lo señalado en el artículo 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

